

El auge del narcotráfico en Haití y la guerra (fallida) contra las drogas*

Elsa María Fernández Andrade**

Universidad Nacional Autónoma de México

Resumen

El narcotráfico en Haití comenzó a detectarse en la década de 1970 bajo el régimen dictatorial de Jean Claude Duvalier y fue pasado por alto por Estados Unidos. Con el transcurso de los años pudo constatar que podía ser utilizado como un elemento desestabilizador para señalar a un presidente democráticamente electo; de tal suerte que la guerra contra las drogas “llegó” a Haití cuando Jean Bertrand Aristide ocupó la presidencia de la República por primera vez en 1991, porque a raíz de ello se aplicaron los criterios estadounidenses de preservación de la seguridad nacional, al considerarse este país como una amenaza. El narcotráfico ha aumentado debido a la debilidad de las instituciones, la inestabilidad política, la corrupción, la supeditación a las directrices estadounidenses y la falta de autonomía.

Palabras clave: Haití, Estados Unidos, Caribe, narcotráfico, política (Thesaurus), siglo XX (Autor).

* **Artículo recibido:** 30 de septiembre de 2017 / **Aceptado:** 19 de octubre de 2017 / **Modificado:** 27 de octubre de 2017. Artículo resultado de la investigación doctoral que versa sobre seguridad nacional de Estados Unidos y combate a las drogas en América Latina y el Caribe. La investigación se realizó en el marco del programa de estudios de posgrado, en el cual se contó con una beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), México.

** Candidata a doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (México D.F.). Entre sus últimas publicaciones se encuentran: el sistema político de Japón. Tránsito del culto al emperador al nuevo modelo de Estado económico unitario de alta centralización política. En J. C. Velázquez Elizarrarás *Sistemas Políticos comparados. La organización política del Estado y su inserción en las relaciones internacionales* (pp. 359-423). México: Universidad Nacional Autónoma de México-Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 2009 y *El narcotráfico y la descomposición política y social. El caso de Colombia*. México: Plaza y Valdés, 2002. Correo electrónico: elsa_fernandez@ymail.com  <https://orcid.org/0000-0001-9577-847X>

The Rise of Drug Trafficking in Haiti and the (failed) War on Drugs

Abstract

Drug trafficking in Haiti began to be detected in the 1970s under the dictatorial regime of Jean Claude Duvalier and was overlooked by the United States. Over the years, it became clear that drug trafficking could be used as a destabilizing element to finger point a democratically elected president; it so happened that the war on drugs “arrived” in Haiti when Jean Bertrand Aristide became President of the Republic for the first time in 1991, which resulted in the implementation of US criteria for preserving national security, since the country was considered a threat. Drug trafficking has increased due to weak institutions, political instability, corruption, dependence on US guidelines, and lack of autonomy.

Keywords: Haiti, United States, Caribbean, drug traffic, policy (Thesaurus); 20th century (Author).

Introducción

La finalidad de este artículo es analizar la participación creciente de Haití en el narcotráfico y las medidas que el gobierno de Estados Unidos ha instrumentado en los momentos históricos coyunturales en los que ha definido que la situación del país caribeño representa una amenaza a su seguridad nacional. Para ello se enfoca el análisis en tres momentos: la contención del comunismo, la posguerra fría y la guerra total contra el terrorismo. En cada uno de ellos resalta el uso diferenciado que del narcotráfico se ha dado, así como las concepciones que han imperado en el gobierno estadounidense.

A su vez, se consideran las condiciones políticas internas y de asistencia internacional que se entrelazan y complejizan aún más la realidad haitiana, generando condiciones que expresan la subordinación de este país a los dictados internacionales. Por lo tanto, se deduce que Haití se ha convertido en un escenario singular de contradicciones entre las políticas antidrogas y las asistencialistas, pero no porque éstas entren en conflicto ya que son de la misma naturaleza, coercitivas, sino porque entrañan la supeditación. La importancia de este análisis se da al presentar la expresión de las contradicciones imperialistas que confluyen en un solo país y al señalar que la guerra contra las drogas es una política de ocupación permanente, porque ha ido penetrando las esferas políticas y económicas de Haití, además de asentar la presencia militar y policíaca en el territorio, análisis que también puede aplicarse a otros países considerando sus peculiaridades.

Para el desarrollo de esta aportación se consultaron en la Biblioteca del Congreso audiencias de la Cámara de Representantes y del Senado de Estados Unidos, además de documentos de otras instancias del gobierno de ese país, principalmente. Asimismo, se

revisaron algunas páginas electrónicas dedicadas a la política haitiana. La guerra contra las drogas es una política instrumentada por Estados Unidos cuyos inicios fueron xenofóbicos y discriminatorios —a principios del siglo XX se estigmatizó el consumo de drogas entre los migrantes chinos y mexicanos que habían llegado a ese país, y entre la población negra—, que se ha embestido de criterios morales y mesiánicos para presentarle al mundo occidental que la mejor manera para contrarrestar la actividad del tráfico de drogas ilícitas es penetrar en los países tradicionalmente llamados productores y de tránsito —explícitamente manifestado durante la administración del presidente Ronald Reagan—, siendo Estados Unidos el ariete de la libertad y la justicia. Es, además, una política injerencista y limitante del ejercicio pleno de los derechos de terceros, porque manipula y condiciona su libre actuación para diseñar las políticas endógenas que más les convenga, porque condiciona el acceso a programas económicos y comerciales que, por supuesto, lidera Estados Unidos.

La guerra contra las drogas liderada por Estados Unidos en buena parte del mundo, es un mecanismo de la proyección de su política de seguridad nacional cuya finalidad va más allá del “bloqueo” del tráfico de drogas ilícitas, ya que desde 1930 las consideraciones xenofóbicas y discriminatorias se fueron acentuando y extrapolando al plano internacional, sobre todo con las decisiones tomadas por Harry Anslinger que, como secretario de la recién creada Oficina Federal de Narcóticos, se opuso a la legalización del consumo de la marihuana e instrumentó las políticas a seguir en Asia, las cuales tuvieron como objetivo Japón, China, Vietnam, entre otros países. La Oficina Federal de Narcóticos fue consolidando su política de control de drogas y posicionándose como una agencia con poder y determinación para diseñar las políticas correspondientes basadas en el patriotismo anti-drogas de Anslinger vinculado con la ideología de la seguridad nacional de la Guerra Fría.

Como resultado de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos replanteó las bases de su política de seguridad nacional que implicó la creación de nuevas agencias —como el Consejo de Seguridad Nacional y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que surgió de la Oficina de Servicios Estratégicos—, así como la fusión de otras —por ejemplo los Departamentos de Guerra y Marina dieron origen al Departamento de Defensa—, en particular, sentó las bases de su concepción del mundo y la preservación de sus intereses, sustentado en la Ley de Seguridad Nacional de 1947. Fue hasta el año 2001 cuando se realizó el otro gran cambio en materia de seguridad nacional. Asimismo, surgió la política asistencialista con la reconstrucción de Europa donde el Plan Marshall fue el pivote de la misión.

En este contexto, entre las décadas de 1940 y 1950, la CIA comenzó a facilitar el tráfico de drogas en el sur y sureste de Asia, culminando hasta nuestros días en Afganistán donde, con la invasión estadounidense, la producción de opio se ha incrementado

considerablemente. Con esto la CIA pasaba a ser un ente de desestabilización política que utilizaba recursos de procedencia ilegal. El uso de recursos ilícitos —dinero lavado— fue institucionalizado en 1948 con la creación de la encubierta Oficina de Coordinación Política (OPC, por sus siglas en inglés), cuya encomienda era participar en la subversión contra estados considerados como hostiles. Gracias a esta oficina, Estados Unidos comenzó a dar un importante apoyo encubierto a los capos de la droga alrededor del mundo. De acuerdo con Scott (2010), las políticas de la OPC y la CIA han allanado el camino del tráfico de opio en Asia.

El Caribe, por su parte, fue uno de los escenarios de contención comunista donde Estados Unidos estrechó los lazos con sus aliados, respecto a Haití el apoyo fue contundente en lo militar, lo político y lo económico. En materia militar se perseguía, en principio, contener la eventual amenaza que representaba Cuba y, en segundo lugar, capacitar al ejército para mantener el orden interno. En lo político, el apoyo del gobierno del presidente Dwight D. Eisenhower se expresó de inmediato a través de su embajada en Puerto Príncipe, mientras que se fortalecían los vínculos entre los legisladores haitianos con congresistas estadounidenses. En cuanto al apoyo económico, el gobierno haitiano recibió entre febrero y septiembre de 1959, la cantidad de siete millones de dólares por concepto de donaciones y 4,3 millones en préstamo. El total de las erogaciones, entre donaciones y préstamos, “por los organismos ligados a la embajada de Estados Unidos llegó a sumar 60 millones de dólares en el periodo comprendido entre 1959 y 1962” (Pierre-Charles, 1987, p. 223).

En el marco de la política de contención, en 1961 Estados Unidos diseñó la Alianza para el Progreso, que representaba la lógica de liderazgo e integración económica que perseguía Estados Unidos de tiempo atrás. Con la Alianza para el Progreso se daba impulso al financiamiento y adiestramiento de los ejércitos latinoamericanos que sustentarían la Doctrina de Seguridad Nacional y sus estados ejecutantes particularmente en Sudamérica. Con esto se evidenciaba, una vez más, la estrecha relación entre los programas económicos y los militares. En la cadena del narcotráfico que se desarrollaba en América Latina y el Caribe en la década de 1970, más países se sumaban a ella debido al dinamismo de la demanda y se generaba una particular especialización con la que se distinguía a los países productores —como Bolivia, Colombia, México o Argentina—, de los que eran puntos de tránsito en la ruta hacia Estados Unidos y Europa.

La guerra contra las drogas fue declarada oficialmente el 17 de junio de 1971 por el presidente Richard Nixon como consecuencia de los altos índices de violencia relacionada con el consumo de drogas y el inminente escándalo por el consumo de opiáceos dentro de las filas del ejército estadounidense durante la guerra de Vietnam. Fue, en estricto

sentido, una decisión presidencial. Withford y Yates (2009) aseveran que la guerra contra las drogas se ha mantenido como una de las campañas presidenciales más ambiciosas, con la que los presidentes de Estados Unidos han colaborado en la construcción del significado y contenido de la política de estado para el control de los narcóticos.

El narcotráfico es una actividad multifactorial, que implica diversas actividades como producción, procesamiento, comercialización, transportación, venta y consumo de drogas ilícitas, en la que existen, a su vez, especializaciones en el trabajo —como pueden ser cultivadores, químicos, ingenieros, contadores, guardias, choferes, etcétera—, y donde los países involucrados destacan por la participación predominante que tienen en este circuito, por la cooperación que se establece entre ellos y por sus peculiaridades políticas y económicas propias, lo que Griffith (1998) denominara como *geonarcotics*. En este sentido, Haití destaca por su ubicación geográfica —al ser un puente básico en el mar Caribe para que la droga ilícita de Sudamérica llegue a Estados Unidos y Europa—, por la poca capacidad policíaca y de guardacostas para vigilar sus fronteras, por su debilidad económica e institucional, por la corrupción y las prácticas antidemocráticas —términos empleados por Estados Unidos con los que justifica su intervención y cataloga a los estados como fallidos o frágiles—, y por su relación con Estados Unidos y los organismos internacionales.

Entrada de Haití en el circuito de las drogas ilícitas

En 1973 el gobierno de Estados Unidos inició a través de la *Drug Enforcement Administration* (DEA) la colaboración en materia anti-drogas con el gobierno de Haití, encabezado por Jean Claude Duvalier, ya que el aspecto más relevante era el paso de marihuana originaria de Jamaica, mientras que la cocaína proveniente de Sudamérica comenzaba a transitar por sus costas. Desde entonces se mencionaba que las medidas a tomar, para contrarrestar el flujo de drogas ilícitas, debían orientarse al fortalecimiento y aumento de la vigilancia, así como a la detección, aprehensión y expulsión de contrabandistas del territorio estadounidense. Asimismo, se reconocía que la capacidad de la armada haitiana para patrullar el largo litoral de su país y atender el tráfico ilegal en sus aguas era virtualmente inexistente, debido a la falta de oficiales entrenados, tripulaciones, mantenimiento y capacidad de reparación de las embarcaciones con que contaban.

A mediados de la década de 1970 cuando la relación entre Haití y Estados Unidos se redefinió debido al tema de los derechos humanos, Jean Claude Duvalier hizo lo posible para que su gobierno pareciera democrático y así contar con la asistencia económica y política de Estados Unidos. Si bien es cierto, Duvalier externó su apoyo a Estados Unidos para “luchar

contra el comunismo” representado por Cuba, no le valió del todo para justificar sus actos represivos y mantenerse en el poder. Durante la década de 1980, el Caribe fue el escenario de la Guerra Fría en toda su expresión, pero a la par de esta situación en América Latina y el Caribe, surgía una nueva amenaza a la seguridad nacional estadounidense y estaba representada por las drogas ilegales. En efecto, con Ronald Reagan la guerra contra las drogas alcanzó una nueva dimensión por la asociación entre comunismo, drogas ilícitas y moralidad.

A principios de la década de 1980, América Latina era considerada como la principal fuente de marihuana, cocaína y heroína, las drogas ilegales más usadas en Estados Unidos. Se estimaba que entre el 30% y 35% de la heroína que se consumía en Estados Unidos provenía de México y que era la de más alta calidad en comparación con la de otras partes del mundo. El negocio ilegal de estas drogas dejaba un derrame económico anual de entre 30,000 y 60,000 millones de dólares. De acuerdo con la posición oficial, el contrabando y venta de estas tres drogas en conjunto las convertía en la empresa criminal más lucrativa en la historia del país (House of Representatives, Subcommittee on Crime of the Committee of the Judiciary, 1984, p. 1). Su “miedo” estaba basado en las incautaciones de metacualona que se habían realizado en Bahamas, Caimán y Panamá, sin tener certeza de la fuente de origen.

En diciembre de 1982 se autorizó a la embajada de Estados Unidos en Haití, negociar la extensión del acuerdo de asistencia de 1981 con el gobierno haitiano. La extensión del programa por 209,000 dólares incluía el costo de combustible y piezas de repuesto para que la marina haitiana continuara con las operaciones de vigilancia, que consistían en localizar botes con droga que transitaran por el Paso de los Vientos e informar a la Guardia Costera estadounidense de su localización, también realizaban actividades de interdicción de balsas cargadas con droga (House of Representatives, Subcommittee on Crime of the Committee of the Judiciary, 1984, p. 41).

La cooperación internacional para paliar este negocio ilícito se daba en distintos frentes, uno de ellos era el entrenamiento que otorgaban la DEA y Aduanas. Para el año fiscal 1982 el entrenamiento se dio a 239 elementos de ejecución de la ley sudamericanos, incluyendo 101 de Perú, 55 de Bolivia, 45 de Colombia, 34 de Brasil y 4 de Ecuador. En 1980, 225 personas de los países caribeños, así como 233 de Centroamérica y México recibieron entrenamiento del fondo *International Narcotics Matters* en Estados Unidos o en sus propios países (House of Representatives, Subcommittee on Crime of the Committee of the Judiciary, 1984, p. 44).

La relación entre Jean Claude Duvalier y Ronald Reagan parecía estable, pero los excesos cometidos por el dictador –corrupción, nepotismo, represión política, así como la creciente crisis económica y el aumento de la oposición entre algunos sectores del

ejército—, debilitaron progresivamente la posición de Duvalier. A ello se unió la gradual retirada del apoyo del gobierno estadounidense, que se encontraba presionado por una opinión pública que desaprobaba al régimen haitiano. Durante la gestión de Jean Claude Duvalier el gobierno de Estados Unidos manejó la participación de Haití dentro de la cadena del narcotráfico como país de tránsito de droga proveniente de Colombia, particularmente, con rumbo a Estados Unidos. Pero este señalamiento no tuvo mayor impacto.

La ingobernabilidad que para entonces caracterizaba al régimen de Jean Claude Duvalier facilitó las actividades de los narcotraficantes colombianos, quienes desde 1985 comenzaron a buscar puntos de tránsito adicionales para la entrada de cocaína a Estados Unidos. Ante esta escalada, la CIA creó un servicio de inteligencia en Haití para combatir el comercio ilegal de drogas y convirtió a ese organismo en un instrumento de terror político. Cabe señalar que los lazos entre la CIA y el servicio de inteligencia continuarían hasta el primer golpe de Estado que derrocó al presidente Jean Bertrand Aristide en 1991.

El gobierno de Jean-Claude Duvalier cayó en febrero de 1986 a raíz de la retirada definitiva del apoyo militar y económico de Estados Unidos ante una situación de terror que ya era incontenible y que había vivido desde los inicios de la dictadura duvalierista. Entre septiembre de 1957 y febrero de 1986, cerca de 20,000 haitianos fueron asesinados por manos duvalieristas, particularmente por el grupo de los Tonton Macoutes, mientras que en el período de febrero de 1986 y enero de 1988, entre 1,000 y 2,000 murieron a manos del mismo grupo (Bellegarde-Smith, 1988, p. 16). Posterior a la caída de Duvalier hijo se celebraron elecciones en las que Leslie Manigat resultó electo, pero a los pocos meses fue derrocado por el golpe de Estado encabezado por el jefe del ejército, el general Henri Namphy, quien a los tres meses fue depuesto por el general Prosper Avril. A su vez, las elecciones celebradas en junio de 1988 fueron muy cuestionadas, de ellas resultó ganador Leslie Manigat quien obtuvo el 50,29% de los votos con la participación de sólo el 10% de los haitianos facultados para votar.

Cabe señalar que bajo el régimen de Henri Namphy, entre febrero de 1986 y febrero de 1988, los puertos se convirtieron en zona franca sin control aduanero, lo que permitió el desarrollo de muchas actividades ilegales. En 1987 la ayuda económica que brindaba Estados Unidos a Haití fue suspendida, lo cual se interpretó como una medida de presión para que el gobierno comenzara a reorganizar el país y se lograra la estabilidad social, y para que se sentaran las bases que condujeran a la transición a un gobierno civil. Para contribuir al tránsito de la democracia en Haití, Estados Unidos apoyó de manera económica y comercial a la nación caribeña, también para la realización de las elecciones, junto con las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, tras el derrocamiento del presidente provisional Leslie Manigat le fue suspen-

dido al país todo tipo de apoyo y se vio alterada la relación con Estados Unidos debido a la creciente utilización de Haití, por parte de los carteles del narcotráfico, como un punto de tránsito de sustancias ilícitas hacia la nación del norte. La evidencia indicaba que los jefes militares haitianos estaban involucrados en dicha actividad (House of Representatives, Subcommittee on Western Hemisphere Affairs of the Committee on Foreign Affairs, 1988b, p. 3).

Así que mientras en Colombia, por ejemplo, se instrumentaban medidas drásticas para combatir el narcotráfico —como la aspersión de cultivos de coca con glifosato—, en Haití se iban consolidando las actividades de tránsito de drogas ilícitas hacia Estados Unidos desde 1985, aún con la ayuda que comenzaba a darse para contrarrestarlas. Ante esto, para 1988 en la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos se exhortaba a que el gobierno estadounidense y el Departamento de Estado cortaran el apoyo a Haití debido a sus vínculos con el tráfico ilegal de drogas y el contrabando de armas procedentes de Miami, Florida (House of Representatives, Subcommittee on Western Hemisphere Affairs of the Committee on Foreign Affairs, 1988b, p. 110). Conviene destacar que para ese año de 1988, Haití no estaba considerado ni en la lista de países a certificar ni en la lista de la descertificación, aún cuando ya era considerado como un importante paso de cocaína de Colombia a Bahamas (House of Representatives, Committee on Foreign Affairs, 1988a, pp. 19-20), y que desde la era de François Duvalier Estados Unidos tenía conocimiento del tráfico de sustancias ilícitas por el país.

Por otro lado, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley contra el abuso de drogas de 1988 (P.L. 100-690) que contemplaba provisiones de ayuda económica como una especie de premio a la cooperación de algunos gobiernos extranjeros; permitía que el presidente de Estados Unidos transfiriera la ayuda económica de los países “que no cooperaban” a los que sí lo estaban haciendo. Éstas y otras ayudas dependían de la certificación del presidente, y en caso de que un país fuera señalado se recurría a la amenaza de suspenderle el beneficio económico. Entre septiembre de 1988 y marzo de 1990, el general Prosper Avril ocupó la presidencia del país. Fue presionado por Estados Unidos para llevar a cabo ciertos cambios en la situación prevaleciente para obtener así la reanudación de la ayuda económica suspendida desde noviembre de 1987. Los cambios requeridos giraban en torno a la elección de un gobierno civil, el respeto a los derechos humanos, las mejoras económicas y la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Pero debido a la inestabilidad política ocurrida durante meses, el presidente Avril dimitió y salió del país, fue remplazado por una jueza de la Suprema Corte, Ertha Pascal Trouillot, quien estuvo más dedicada a la atención de los preparativos para las

elecciones presidenciales de 1990. Cabe señalar que Estados Unidos apoyó a cada uno de los gobiernos provisionales que se establecieron después de la caída de Duvalier.

Durante la década de 1980, la política exterior de Estados Unidos en América Latina y el Caribe puso en evidencia la estrecha relación entre los criterios de seguridad nacional —la preservación de sus intereses— y el “desarrollo económico”. Como señala Jaramillo Edwards, esta relación “se acentúa cada vez más, en la medida en que la hegemonía [estadounidense] se desgasta progresivamente” (1988, p. 263). Fenómeno que ciertamente se ha presentado en otros momentos como los esfuerzos por establecer el Área de Libre Comercio de las Américas, que finalmente fracasó.

Derrocamiento de un gobierno democrático y consolidación del narcotráfico

En virtud de los acontecimientos que marcarían el llamado al fin de la Guerra Fría, en el Caribe se observó un cambio por parte de la política exterior estadounidense, ya que la dinámica y estructura del sistema internacional comenzaron a modificarse de manera abrupta, presentando nuevos retos a la seguridad nacional de Estados Unidos y sus intereses en Europa, lo cual no significó el desmantelamiento de bases militares ni mucho menos. Ante las diversas crisis ocurridas en Haití, Oriente Medio, Bosnia, Rusia, Irlanda del Norte, Centroamérica, Camboya y Sudáfrica, Estados Unidos llegó a reconocer la importancia del uso de las medidas económicas para “ayudar a los países a salir de la confusión y mantenerlos fuera de ella” (Rothkopf, 1998, p. 8).

De 1986 a 1990, a pesar de la tradición de autoritarismo que permeaba las relaciones políticas y sociales, en Haití fue tomando forma la organización social a través de la iglesia de base, de agrupaciones campesinas y obreras, así como de organizaciones de periodistas y estudiantes, entre otros, con lo que la gente iría ganando el derecho a la participación. De esta movilización surgió la figura de Jean Bertrand Aristide quien triunfó en las elecciones de 1990. El proyecto político que lideraba tenía un carácter patriótico, democrático y nacional, que condensaba el sentido de las reivindicaciones de las diversas capas sociales y se proponía dar forma a una nueva concepción de Estado al servicio de la nación e impedir que el aparato estatal continuara siendo fuente de enriquecimiento de un pequeño grupo de personas.

En febrero de 1991 ocupó la presidencia del país, hecho que para muchos representaba una segunda independencia; sin embargo, sólo estuvo en el cargo siete meses debido al golpe de Estado que encabezaron los militares liderados por el general Raoul Cédras, quien recibió financiamiento de la embajada de Estados Unidos y del negocio

del narcotráfico en el que se involucró. Como consecuencia del golpe de Estado, Aristide tuvo que salir del país y desde ahí emprendió una serie de gestiones internacionales que le permitieron regresar hasta octubre de 1994 —acompañado de una fuerza multinacional— y culminar su período de gobierno.

El narcotráfico, si bien ya estaba asentado en la isla, no había sido utilizado como medio para sostener un régimen que derrocaria a un gobierno democrático. Este hecho contradecía, en apariencia, los propios argumentos que utilizó Estados Unidos en 1989 para derrocar al general Manuel Antonio Noriega por sus vínculos con el narcotráfico e invadir Panamá, con lo cual resulta evidente el manejo discrecional de la política estadounidense para defender sus intereses vitales y que América Latina y el Caribe seguían siendo considerados como su área de influencia “natural”. Por este acontecimiento Haití es considerado como un caso singular en la política exterior de Estados Unidos tras el fin de la Guerra Fría por el manejo que se le dio, ya que sólo ante las presiones internacionales pudo establecerse un mecanismo para el retorno de Aristide.

A su regreso, Aristide tuvo que considerar varios aspectos que derivaron del golpe de Estado, como la agudización de las violaciones a los derechos humanos y el aumento considerable de la migración hacia el exterior —diáspora—, entre muchos otros que resultaron de la violencia política y la crisis económica. Además, tuvo que ceder en ciertos aspectos como el formular los lineamientos de una política neoliberal acorde a los intereses de Estados Unidos y los organismos financieros internacionales, asimismo del desmantelamiento del ejército y dejar solamente a lo que sería la Policía Nacional Haitiana (PNH), ante un movimiento social que estaba debilitado y muy golpeado. A su vez, su discurso ya no incluía el contrarrestar al narcotráfico. Aristide concluyó con lo que le quedaba de mandato, de las elecciones de 1995 René Préval resultó vencedor. Para las elecciones presidenciales del año 2000, Aristide participó nuevamente y logró el triunfo.

En este escenario, a partir de 1999 comenzaron a surgir las críticas en las altas esferas de la política estadounidense por los resultados obtenidos, se argumentaba que “Cinco años después de que Estados Unidos intervino militarmente para restaurar la democracia en Haití, y cerca de 4 mil millones de dólares después, Haití se ha convertido en el centro del tráfico de drogas caribeño” (Subcommittee on Criminal Justice, Drug Policy, and Human Resources of the Committee on Government Reform, 2001, pp. 1-2).

La DEA estimaba que se movían al menos 67 toneladas métricas de cocaína al año a través de Haití, lo que equivalía un 24% más de lo estimado en 1998. Es decir, se miraba con rigurosidad la aplicación de los recursos en un país que no terminaba de asentar las bases de la democracia —tan bien apreciadas por Estados Unidos de acuerdo con su retórica—, que continuaba arrastrando la herencia represiva de la era de los Duvalier

—con grupos dedicados a eliminar a los simpatizantes de Aristide—, y cuyas instituciones también tenían muchos vicios. Además, no se hacía énfasis en que esas toneladas métricas provenían de Sudamérica.

De 1995 a 1999, de acuerdo con lo declarado por el embajador Donal K. Steinberg, Coordinador Especial para Haití ante el Subcomité sobre Justicia Criminal, Política de Drogas y Recursos Humanos del Comité sobre Reforma Gubernamental, el gobierno de Estados Unidos apoyó diversos proyectos como el de ayudar a 225,000 campesinos a adoptar prácticas de agricultura sustentable, capacitar a uno 6,000 maestros de primaria y secundaria, y promover cientos de organizaciones de base en materias de salud, educación ambiental y defensoría pública. Con estos programas también se benefició a mujeres en las áreas rurales y se incrementaron al doble las prácticas modernas de planeación familiar en ciertas áreas. También hubo apoyo para programas de seguridad alimentaria para los niños y programas de cuidado de la salud (Subcommittee on Criminal Justice, Drug Policy, and Human Resources of the Committee on Government Reform, 2001, p. 13).

Con dichos apoyos se pretendían mejorar las condiciones para celebrar elecciones, mejorar el sistema de seguridad y el sistema judicial, así como el de interdicción de drogas. Sin embargo, se consideraba que la situación era preocupante debido a que el apoyo brindado no se reflejaba en los avances esperados y el narcotráfico aumentaba al grado de corromper las más altas esferas oficiales del país. Como consecuencia, en marzo de 1999 el gobierno de William J. Clinton desertificó por primera vez a la nación caribeña.

Es pertinente señalar que Estados Unidos, a través de la DEA, capacitó a la PNH (surgida en 1995), a jueces y magistrados, en 1997 creó el Buró contra el Tráfico de Estupefacientes. Eventualmente, Estados Unidos cuestionaría el lugar a dónde había ido a parar la ayuda destinada a Haití entre 1996 y 1999 para mejorar el sistema judicial y de seguridad ya que no veía resultados satisfactorios, pues hasta ese momento se manejaba que la cantidad destinada para ese fin había sido de 200 millones de dólares.

Ante este panorama, lo que Haití necesitaba con urgencia, de acuerdo con los planes estadounidenses, eran: 1) elecciones legislativas y locales que fueran transparentes y libres, porque de esa manera el gobierno tendría credibilidad, podrían atraerse nuevas inversiones, negociarse nuevas cooperaciones con la comunidad internacional, y atender los problemas sociales más apremiantes como el crimen, la inseguridad, la corrupción y el narcotráfico; 2) el fortalecimiento de sus instituciones democráticas y de seguridad que promovieran el respeto por las leyes y la protección de los derechos humanos; y, 3) la interrupción del flujo ilegal de drogas y prevención del resurgimiento de la migración ilegal (que había aumentado considerablemente tras el derrocamiento de Aristide).

Con estos señalamientos parecía que el narcotráfico era una actividad surgida durante el período de crisis 1991-1994, dejándose de lado los antecedentes de la década de 1970 durante el gobierno de Jean Claude Duvalier. En este período de la llamada posguerra fría el narcotráfico era utilizado para señalar negativamente la situación haitiana y se abogaba por medidas para estrechar más la cooperación internacional a fin de combatir el lavado de dinero y el crimen financiero, así como la corrupción, los crímenes financieros, los crímenes ambientales y el tráfico de drogas (The White House, 1998 y 1999). En la década de 1990 se dio un incremento significativo en las toneladas de drogas ilícitas que pasaban por el Caribe y, en consecuencia, aumentaron las operaciones para frenar su tráfico. En este sentido, en 1994 se creó la *Joint Interagency Task Force* (JIAFT) del Este en Key West, Florida, de ahí en adelante realizaría funciones de interdicción de drogas bajo la directriz del general Charles E. Wilhelm, Comandante en Jefe del Comando Sur. Estas actividades seguirían progresando y en 1999 se efectuaría la fusión del JIAFT del Sur de Panamá con la JIAFT del Este, quedando esta última como la encargada de las operaciones antidrogas en el área de influencia del Comando Sur.

Asimismo, colaboraban en la Operación Bahamas, Turcos y Caicos (OPBAT, por sus siglas en inglés), una operación conjunta de la DEA-Bahamas radicada en Nassau, y también con Puerto Rico, país que ya se destacaba en el flujo de cocaína hacia Estados Unidos y ocupaba el primer lugar de atención en los programas antidrogas después de Haití. Por su parte, a partir de 1998 se realizaron diversas operaciones en el Caribe para contrarrestar el flujo de drogas ilícitas, como la Operación *Frontier Lance*, cuyo objetivo era atacar las rutas de tráfico de drogas entre Colombia y Haití; la Operación Génesis, que contemplaba la cooperación anti-drogas entre Haití y República Dominicana; la Operación Columbus —del año 1999—, que fue un esfuerzo multinacional entre los países del Caribe, Venezuela, Panamá y Colombia; y, la Operación Conquistador —de 2000—, en la que participaron 26 países de América Latina y el Caribe.

Todas estas operaciones estaban dentro del Sistema Unicornio, una red regional unificada del Caribe en la que se compartía información de inteligencia respecto al narcotráfico. Pero además de estas operaciones había otras más que se desarrollaban para contrarrestar la droga que salía de Colombia y México específicamente. En el contexto haitiano, Aristide pretendía contender nuevamente por la presidencia de la República, a pesar de contar con varios oponentes tanto nacionales como extranjeros, quienes sabían que para evitar un nuevo triunfo en las elecciones presidenciales era necesario fortalecer las medidas desestabilizadoras de todo tipo, como la preparación de una fuerza paramilitar de intervención para generar un ambiente de miedo e inseguridad y minar la autoridad del gobierno. Asimismo, intensificar las formas de presión económica como

la bancarrota del gobierno y limitar su capacidad para concretar sus promesas de aminorar la pobreza y la inequidad, también el reclutamiento de organizaciones “pluralistas” que representaran al sector empresarial y a la sociedad civil, incluyendo a miembros internacionales de las organizaciones no gubernamentales que podrían ser presentados como opositores legítimos del gobierno; y a su vez, el manejo de una campaña de desinformación a través de los medios de comunicación que calificara al gobierno de corrupto, autoritario y antidemocrático (Hallward, 2010, p. 75).

Aun con todo lo orquestado Aristide ganó las elecciones y asumió nuevamente la presidencia el 7 de febrero de 2001, llegó a un país donde el “estigma” del narcotráfico estaba más que arraigado y que el gobierno de Estados Unidos utilizó en su contra, por lo que en el año de 2004 se le acusó de tener nexos con narcotraficantes (United States Senate, 2005). A su vez, se emplearon otros argumentos basados en situaciones endémicas que no habían podido ser superadas como la corrupción en algunos sectores, sobre todo opositores a Aristide, y la violencia “provocada”. Aristide asumía la presidencia de un país con al menos 80% de la población en extrema pobreza y entre 75% - 80% en el desempleo o sub-empleo, con un ingreso per cápita anual menor a 400 dólares y con el número más alto de enfermos de SIDA, siendo esta enfermedad la mayor causa de muerte entre los adultos.

La guerra total contra el terrorismo y la guerra contra las drogas en un mismo escenario

En el contexto en que Estados Unidos declaraba la guerra contra el terrorismo tras los ataques a las Torres Gemelas y el Pentágono en septiembre de 2001, se dieron los cambios más significativos en materia de seguridad nacional después de la Segunda Guerra Mundial. Se crearon nuevas instituciones y se tomaron medidas extrajudiciales para detener al enemigo, que en realidad era múltiple. Parecía que las premisas de la seguridad nacional estadounidense eran otras, de manera similar a lo ocurrido después del llamado fin de la Guerra Fría, la guerra contra el terrorismo se trasladó a territorios asiáticos y europeos, mientras que en América Latina y el Caribe al argumento de la guerra contra las drogas se traían a colación términos utilizados en otros momentos para descalificar al “enemigo” como el de terroristas —que se había empleado ya en la década de 1980 en Colombia y Perú, por ejemplo, para referirse a la guerrilla—. De tal suerte que, para los estrategas y diseñadores de la política exterior de Estados Unidos, la seguridad nacional se concebía amenazada por múltiples enemigos y circunstancias que potencialmente encerraban el germen de la destrucción.

En el marco de la “guerra total contra el terrorismo” fueron significativos los diversos métodos para frenar el segundo mandato de Aristide: se cuestionaron sus facultades

mentales, se descalificaron sistemáticamente las estructuras de gobierno y se mermó la legitimidad del presidente, lo cual favoreció su derrocamiento el 29 de febrero de 2004 y precipitó su salida del país, que de acuerdo con los voceros del gobierno de Estados Unidos se trató de una huida ante la irremediable situación caótica, mientras que Aristide sostuvo que fue obligado por las Fuerzas Especiales estadounidenses a dejar la oficina presidencial y salir del país para vivir exiliado en África por siete años. En otro plano estaba también la oposición de Canadá y Francia que presionaban mediante distintas vías como la política, la economía y la informativa. Estados Unidos reconocía que “a más de diez años de experimentar con la democracia” Haití era un estado fallido y “era hora de comenzar a verlo como una amenaza potencial a la seguridad nacional” (United States Senate, 2005, pp. 3-4).

De acuerdo con la lógica de los países que integran el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la apreciación que se tenía de Haití no era la mejor ya que después de varios intentos por ayudarlo a alcanzar la paz interna, crear instituciones fuertes y democráticas, profesionalizar la Policía Nacional, etcétera, continuaban los disturbios —y no se reconocía el fracaso—. De forma novedosa se aplicaban las medidas concebidas durante la década de 1990, las asistenciales y humanitarias, para atender una situación que las grandes potencias consideraban como amenazante del orden internacional en un pequeño país catalogado como el más pobre del continente americano. En este sentido, se asevera que las Naciones Unidas tomarán “medidas colectivas eficaces” cuando existan amenazas a la paz y a la seguridad internacionales como el desplazamiento de refugiados, el derrocamiento de un régimen democráticamente elegido, el incumplimiento de acuerdos entre las partes en conflicto, el no acatar las Resoluciones del Consejo de Seguridad, la expulsión del país de una misión civil internacional, el estancamiento político o la aparición de obstáculos para la estabilidad política, social y económica del país. Se considerará como amenaza cualquier factor incluso si proviene del interior de los Estados.

Días previos al derrocamiento de Aristide de 2004, la Oficina de Apoyo a Desastres Internacionales otorgó 50,000 dólares para transportar y distribuir equipo de emergencias, incluyendo 12 kits médicos y 3 de cirugía —con cada uno se podría dar atención a 10,000 personas por tres meses aproximadamente—. Adicional a esto, la United States Agency for International Development (USAID) aprobó 400,000 dólares en fondos para la Organización Panamericana de la Salud para comprar medicamentos adicionales y para llevar a cabo ayudas de emergencia (United States Senate, 2005, p. 28). Entre 1995 y 2003, Estados Unidos otorgó más de 850 millones de dólares en apoyo para Haití. Esta cantidad fue canalizada generalmente a través del sistema de Organizaciones No Gubernamentales (ONG's) ya que, argumentaban, existía mucha corrupción en el gobierno de Aristide (United States Senate, 2005, p. 22).

Por su parte, en esa etapa crítica del 2001-2004, la ayuda internacional fue destacada, aunque sin obtener los resultados esperados. El mismo gobierno estadounidense se mostraba extrañado. Las ONG's proliferaron y se convirtieron en agentes de desestabilización. Por un lado, se manejaban algunas cifras que daban cuenta de los apoyos otorgados durante un largo período; por ejemplo, la Oficina de Apoyo a Desastres Internacionales, que forma parte de la USAID, otorgó 487,000 dólares aproximadamente para atender emergencias médicas. El total de la ayuda bilateral para el período de 1995 a 2003 fue de 850 millones de dólares, con 71 millones para el año fiscal 2003 (United States Senate, 2005, p. 26). Además se realizaron acciones para apuntalar a la PNH bajo la participación de Estados Unidos en la Fuerza Interina Multilateral y la siguiente fuerza de estabilización de las Naciones Unidas.

Inestabilidad política, fenómenos naturales y narcotráfico: el gran lastre de Haití

Tras el derrocamiento de Aristide, y transgrediendo la constitución política del país, un “consejo de sabios” fue creado por las potencias internacionales para elegir un nuevo primer ministro. Gérard Latortue fue seleccionado por el concejo y nombrado jefe del gobierno interino —marzo de 2004 al junio de 2006—, él era un economista neoliberal y un funcionario de las Naciones Unidas. Junto con su sobrino, Youri Latortue, coordinaron la oposición política y militar contra Aristide. Youri Latorutue, ya como senador, sería uno de los principales aliados del presidente Michel Martelli (Ives, 2011). Al lado de Latortue, Boniface Alexandre ocupó la presidencia por un periodo de dos años —29 de febrero de 2004 al 14 de mayo de 2006—, la violencia política continuó —el número de víctimas fue considerable, sobre todo de los simpatizantes de Aristide— y se instauró una fuerza de ocupación liderada por Estados Unidos y Francia; es decir la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), que permaneció hasta nuestros días, pero que, a consideración del propio Consejo de Seguridad se ha evaluado la pertinencia de que una pequeña agrupación se mantenga en el país. Esta agrupación estaría integrada por 295 de los 1,001 policías que formaban parte de la MINUSTAH y el número del personal civil también sería reducido.

A inicios de 2004 con la formación del nuevo gobierno, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) reveló que la situación de la fiscalización de drogas en Haití se había caracterizado por la ineficacia de la represión antidrogas y la corrupción generalizada; por lo que urgió al nuevo gobierno de Haití a que, con la asistencia de la comunidad internacional y la MINUSTAH, “se asegure de que la fiscalización de drogas tenga prioridad en su programa de reconstrucción nacional y a que adopte las

medidas necesarias para combatir el tráfico y el creciente uso indebido de drogas en el país” (Pandillas juveniles involucradas en el tráfico de drogas, 2005, párr. 3).

Las elecciones presidenciales se retrasaron repetidamente y al final tuvieron efecto en febrero de 2006, bajo fuertes incidentes desestabilizadores, señalamientos de que no fueron limpias ni seguras. El ganador fue René Préval quien una vez más asumió la presidencia y estuvo en ella desde el 14 de mayo de 2006 al 14 de mayo de 2011. Como retos tenía la férrea presencia de conductas autoritarias que generaban inestabilidad, fomentaban la corrupción y la violencia; también estaba ante la continuación de las medidas neoliberales, que fue el camino que tomó. Durante su administración no disminuyó la pobreza ni mejoraron las condiciones económicas y sociales de la gran mayoría de la población. Y lo que agravó aún más esta situación fue el terremoto del 12 de enero de 2010 que prácticamente devastó al país y dejó más de 300 mil muertos. Este desastre natural traería como consecuencia la solidaridad internacional inmediata, pero también el que “surgieran” muchas ONG’s —más de las que ya estaban en el país— y se abrogaran el derecho de canalizar las ayudas económicas y en especie, así como la facultad de administrarlas, generando suspicacias respecto a su manejo. La intervención internacional para “ayudar” a Haití, de acuerdo con Seguy (2014), es una forma de neocolonialismo.

A su vez, tras el terremoto, las actividades de los narcotraficantes se reactivaron, de ahí que el Departamento de Estado y la USAID pidieran al Congreso, para 2010-2011, duplicar el presupuesto dedicado al “control del narcotráfico y el reforzamiento de la ley”. Solicitaron un suplemento de 143.500.000 de dólares para apoyar a la MINUSTAH, rehabilitar las cárceles y justicia, y restablecer la capacidad de la PNH para combatir el narcotráfico (United States Department of State y U.S. Agency for International Development, 2010, p. 20). Cabe señalar que en la Quinta Cumbre de las Américas en abril de 2009 celebrada en Trinidad y Tobago, Estados Unidos y los países del Caribe acordaron trabajar juntos por medio de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe para combatir el tráfico de drogas así como otros delitos transfronterizos que amenazan la seguridad regional. Esta alianza cumplió el compromiso del presidente Barack Obama de profundizar la cooperación regional en materia de seguridad y complementaba otras iniciativas de seguridad ciudadana en el hemisferio; la Iniciativa Mérida en México, la Iniciativa de Seguridad Regional de América Central y la Iniciativa de Desarrollo Estratégico de Colombia.

La reactivación de las rutas de tránsito de drogas fue un hecho que Washington empleó para incrementar la militarización del área del Gran Caribe a partir de la Iniciativa de Seguridad Regional para América Central y la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe. En tal empeño se ha incrementado el uso de drones y Fuerzas de Operaciones Especiales. Por su parte, la administración de Michel Martelli —14 de mayo de 2011 al 7 de febrero de 2016—

estuvo caracterizada por la atención a los estragos causados por el terremoto; los objetivos no sólo eran reconstruir las zonas devastadas y otorgar vivienda a miles de damnificados, sino atender la emergencia sanitaria que implicó la epidemia del cólera. Fue en este período donde precisamente proliferaron las ONG's extranjeras cuya finalidad era apoyar en esas tareas.

A su vez, en medio de fuertes críticas por la supuesta intervención en el proceso electoral, Martelli entregó la presidencia de Haití para la conformación de un gobierno interino –mientras el gobierno seguía en funciones– tras la firma de un acuerdo con el presidente del Senado y el encargado de la Cámara de Diputados. Esto lo hizo porque no tuvo sustituto debido a que no se celebró la segunda vuelta de las elecciones, prevista para el 25 de enero, pues se anularon por las denuncias de la oposición. En consecuencia, Jocelerme Privert, ex ministro del Interior de Aristide y presidente del Senado, fue elegido por la Asamblea Nacional como presidente interino para ocupar el cargo cien días a partir del 14 de febrero de 2016. Su misión era dirigir las elecciones previstas para el 24 de abril y entregar el cargo a un mandatario legítimo el 14 de mayo. Sin embargo, la organización de las elecciones no fue tarea fácil por los desacuerdos que surgían y porque se sobrevino otra catástrofe natural de gran envergadura que prácticamente devastó el occidente del país: el huracán Mathew, en octubre de 2016.

Además, en medio de fuertes oposiciones internas, inseguridad, pillaje y brote de enfermedades, el presidente interino recibió la ayuda internacional correspondiente y tuvo algunas diferencias con miembros del Senado debido a la ayuda que le otorgaba República Dominicana en particular, pues no sólo la entregaban sino que era custodiada por soldados dominicanos hasta tierras haitianas debido a la inseguridad que prevalecía. A pesar de exigirle su dimisión, él se mantuvo firme y logró mantener relaciones adecuadas con su vecino. Después de un proceso electoral de casi dos años, marcado por acusaciones de fraude electoral, desastres naturales, nuevos brotes de cólera, la presencia de la MINUSTAH y un amplio abstencionismo, Jovenel Moïse ganó las elecciones presidenciales en segunda vuelta en noviembre de 2016 –en la primera vuelta compitieron 27 candidatos–, con un 55,6% de los votos, siendo hasta un mes después que se confirmó el resultado; de tal suerte, a partir del 7 de febrero de 2017 es el presidente del país. El triunfo de Moïse fue polémico porque sólo acudió a votar el 21% de los ciudadanos habilitados, muchos no participaron porque perdieron sus documentos oficiales en las inundaciones provocadas por el huracán.

El huracán Matthew dejó daños estimados en más de 2,000 millones de dólares, lo que volvió más compleja la situación del país con una deuda de más de 2,000 millones de dólares, ante lo que se estimaba que el crecimiento de su economía apenas alcanzaría el 1% en 2017 debido a la falta de inversión pública y privada. Más del 60% de los haitianos sobreviven con menos de dos dólares al día, de acuerdo a los reportes de Naciones

Unidas; a su vez, hay 55,000 haitianos que desde el terremoto de 2010 viven en campamentos improvisados en condiciones de extrema pobreza, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (Haití: quién es Jovenel Moïse, 2017). Asimismo, existen otros problemas delicados que tienen que ver con países vecinos. Por ejemplo, con República Dominicana destacan la regularización de los haitianos indocumentados que se encuentran en Dominicana; la invasión de frecuencias radiales y telefónicas por parte de radiodifusoras haitianas en la frontera; y la llegada de mujeres haitianas a hospitales dominicanos para dar a luz, entre otros. Temas que sin duda afectan la soberanía y seguridad de ambos países, y generan además desencuentros entre República Dominicana y la comunidad internacional, cuando se espera que Dominicana absorba todo esto. También están las tensiones con Estados Unidos ante la futura definición del estatuto de protección temporal, bajo el cual se encuentran unos 58,000 haitianos que viven en aquel país, ya que si el estatuto no se ratifica podrían ser deportados a Haití.

Haití se ha mantenido en las listas de países productores de drogas aunque su relevancia en esta cadena delictiva es de país tránsito. En septiembre de 2015, el presidente Barack Obama presentó la relación de esos países en la que se incluyó a Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Myanmar, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela (Notimex, 2015). En la presentación de esta lista, Obama refirió que se habían incluido siete naciones centroamericanas y cuatro más del Caribe, por el hecho “de que constituyen el corredor de tránsito del 100% de la cocaína que se consume en Estados Unidos”. Lo cual es otro indicador de que el tráfico de cocaína ha crecido considerablemente.

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos, en el *International Narcotics Control Strategy Report* de marzo de 2017 (United States Department of State y Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, 2017, p. 176), señala que Haití sigue siendo un punto de tránsito para la cocaína originaria de América del Sur y la marihuana originaria de Jamaica, en ruta hacia Estados Unidos y otros mercados, y que sus fronteras marítimas en las costas norteñas y meridionales presentan escaso patrullaje. Se añade que el gobierno haitiano ha seguido fortaleciendo a la PNH, así como a la Oficina de Lucha contra el Narcotráfico (*Bureau for the Fight Against Narcotics Trafficking*, BLTS) con mano de obra adicional, y que los funcionarios de los más altos niveles del gobierno se han comprometido repetidamente a combatir el narcotráfico.

Las iniciativas de control de drogas de los Estados Unidos en Haití se centran en mejorar la capacidad de la Policía Nacional, el BLTS y la Guardia Costera para detectar, investigar y disuadir el flujo de drogas ilegales a través del país. Estas actividades están regidas por una carta de acuerdo de 2004 y un acuerdo de 2013 que se enmienda anualmente. Respecto a

estos tres órganos orientados a las actividades antidrogas destaca que cada año ingresan nuevos oficiales a la Policía Nacional, lo cual permitirá que esta institución cumpla su meta quinquenal de plan de desarrollo de 15,000 oficiales y “asuma una mayor responsabilidad por la seguridad” antes de la retirada de la MINUSTAH. Mientras tanto, el BLTS aumentó su capacidad de interdicción en 2016 al asignar oficiales a nuevos puestos avanzados en Ouanaminthe, en la frontera con la República Dominicana, y Cap Haitien, en la costa norte, y extendió sus actividades por el uso de una unidad canina de 19 perros y la participación en capacitación financiada por los Estados Unidos en Colombia.

A su vez, la Guardia Costera de Haití es la única agencia marítima en el país con facultades para hacer cumplir la ley en el resguardo de las fronteras marítimas. La Guardia Costera tiene bases operativas en Cap Haitien, Killick (Puerto Príncipe) y Les Cayes, cuenta con un total de 18 buques marítimos, pero sólo cinco están actualmente en funcionamiento; asimismo, debe patrullar las 1,100 millas de costa de Haití y siete puertos internacionales, aun con su baja capacidad operativa debido a los recursos insuficientes, las deficiencias en la gestión, la incapacidad de reabastecimiento y la falta de refacciones para mantener las unidades en buen estado.

Haití permanece en la agenda de prioridades de seguridad nacional estadounidense y su importancia no estriba sólo en su ubicación geográfica como punto de confluencia con Cuba y Venezuela —países importantes en recursos naturales y contrarios a la política económica de Estados Unidos—, sino por su riqueza en el subsuelo —oro, gas, petróleo, iridio— (Aristide Book Revealed Major Oil and Natural Gas Deposits in Haiti, 2011, párr. 3 y 10).

Conclusiones

Desde que François Duvalier estaba en la presidencia se conoce la participación de Haití en el comercio ilegal de drogas, ya sea porque es un lugar de paso, de transbordo, de carga de combustible y hasta bodega. En este “negocio” han participado militares corruptos y altos funcionarios del gobierno. Así que durante el período de contención comunista Estados Unidos toleró la corrupción y la participación de diversos agentes gubernamentales en esta actividad ilícita. La evidencia demuestra que ha sido en el período de la posguerra fría, a partir del primer gobierno democrático de Aristide, que el narcotráfico adquirió notoriedad porque este presidente aseveró que tomaría medidas para contrarrestarlo; paradójicamente, fue la actividad que permitió al régimen golpista de Raoul Cédras mantenerse.

A partir de la década de 1990, el narcotráfico en América Latina y el Caribe continuó siendo el principal objetivo de la guerra contra las drogas, y con los proyectos económicos integracionistas impulsados por Estados Unidos se gestó una relación con-

dicionante entre ambos. Más aún después del ataque a las Torres Gemelas y el Pentágono en 2001, la guerra total contra el terrorismo decretada por el gobierno de George W. Bush no significó el que la guerra contra las drogas pasara a un segundo plano, sino que se reforzó. En Haití, se tuvo el ejemplo con el segundo derrocamiento de Aristide en el año 2004, donde, entre otros factores, la participación de militares haitianos en actividades ilícitas —tráfico de drogas y lavado de dinero— quedó expuesta.

Por lo tanto, desde la década de 1990 Haití ha tenido la presión estadounidense para involucrarse más en actividades anti-drogas siguiendo los lineamientos establecidos por la DEA. También ha estado presente la injerencia externa para que Haití cambie sus instituciones, el sistema judicial, termine con la corrupción y fortalezca la democracia de acuerdo con los parámetros de las naciones occidentales del “primer mundo”, sin tomar en cuenta la propia esencia haitiana, su cultura e idiosincrasia. Aun con la presencia internacional representada en esas misiones de paz o de estabilización, el hecho es que no se ha salvaguardado ni la integridad de las personas, ni de las instituciones, ni de las fronteras. Antes bien se ha constituido en una modalidad de neocolonización en la que todos los ahí involucrados se consideran precursores para llevar las “buenas instituciones”, la democracia participativa y la justicia, aunque en realidad sean los criterios de las grandes potencias los que imperan.

Por más inversión que Estados Unidos ha destinado a Haití para frenar las actividades del narcotráfico los resultados han sido contradictorios —de acuerdo con sus propios argumentos—, las misiones de paz también han sido un factor de freno ya que han contribuido al deterioro de la situación interna —aspectos conocidos ampliamente como el brote del cólera, violaciones sexuales, aumento de contrabando en general y de violencia—; el sistema institucional, económico y jurídico continúa siendo débil, lo mismo que las condiciones sociales en que se encuentra el país. La apuesta por la guerra contra las drogas en general ha fallado no sólo porque las toneladas métricas que entran a Estados Unidos, en su caso, han aumentado desde hace dos décadas —de acuerdo con sus propias cifras que sostienen que el país vive una epidemia de la heroína con un promedio de 65 mil muertos por año—, sino porque también ha generado mucha violencia y corrupción.

Haití es un eslabón más del circuito de las drogas ilícitas que obedece, en buena parte, a la demanda generada en Estados Unidos y Europa, y de acuerdo con el incremento de la demanda la participación de este país caribeño en el narcotráfico se ha comprometido más en un contexto neoliberal donde los programas asistenciales están vinculados con los programas militares que encabeza Estado Unidos, programas con los que sólo se profundizan las relaciones de dominación y exclusión.

En Haití la expresión de la guerra contra las drogas, los programas económicos y la ayuda humanitaria —incluidas las misiones de paz— confluyen en un mismo eje que da

cuenta de los intereses imperialistas de Estados Unidos, en principio, por mantener su presencia en el Caribe; actuación motivada por las premisas básicas que le dan carácter a su seguridad nacional, aunque no se mencionen de manera explícita —excepcionalismo, destino manifiesto y doctrina Monroe— y que se activan mucho más cuando su hegemonía se encuentra en crisis.

Referencias

- Aristide Book Revealed Major Oil and Natural Gas Deposits in Haiti (11 de marzo de 2011). *Press Core*, recuperado de <http://presscore.ca/?p=1476>
- Bellegarde-Smith, P. (1988). Testimonio. En *House of Representatives, Subcommittee on Western Hemisphere Affairs of the Committee on Foreign Affairs. The Political Crisis in Haiti, Hearing, 100th Congress, 2nd session, 8 y 23 de marzo de 1988* (pp. 8-21). Washington: United States Government Printing Office.
- Griffith, I. L. (1998). The Geography of Drug Trafficking in the Caribbean. En M. C. Desch, J. I. Domínguez y A. Serbín (Ed.), *From Pirates to Drug Lords: The Post-Cold War Caribbean Security Environment* (pp. 97-119). New York: State University of New York Press.
- Haití: quién es Jovenel Moise, “el hombre banana” que será presidente del país más pobre de América y tuvo que ganar dos veces las elecciones para ser declarado vencedor (4 de enero de 2017). *BBC Mundo*, recuperado de <http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38504158>
- Hallward, P. (2010). *Damming the Flood. Haiti and the Politics of Containment*. London: Verso.
- House of Representatives, Committee on Foreign Affairs. (1988a). *Narcotics Review in the Caribbean, Hearing, 100th Congress, 2nd Session, 9 de marzo de 1988*. Washington: United States Government Printing Office.
- House of Representatives, Subcommittee on Western Hemisphere Affairs of the Committee on Foreign Affairs. (1988b). *The Political Crisis in Haiti, Hearing, 100th Congress, 2nd session, 8 y 23 de marzo de 1988*. Washington: United States Government Printing Office.
- House of Representatives, Subcommittee on Crime of the Committee of the Judiciary. (1984). *Drug Production and Trafficking in Latin America and the Caribbean, Hearing, 98th Congress, 1st session, 12 de mayo de 1983*. Washington: United States Government Printing Office.
- Ives, K. (2011). “Mafia boss... Drug dealer... Poster-boy for political corruption”: WikiLeaks U.S. Embassy Cables Portray Senator Youri Latortue. *Haiti Liberte*, 50 (4), recuperado de <https://www.canadahaitiaction.ca/content/wikileaks-%E2%80%9Cmafia-boss-drug-dealer-poster-boy-political-corruption%E2%80%9D-wikileaks-us-embassy-cab>
- Jaramillo Edwards, I. (1988). Variantes intervencionistas en la “Cuenca del Caribe”. En G.

- Pierre-Charles (Comp.), *Capital trasnacional y trabajo en el Caribe* (pp. 263-281). México: Plaza y Valdés – Universidad Nacional Autónoma de México – Instituto de Investigaciones Sociales.
- Notimex. (14 de septiembre de 2015). Obama revela lista de principales países productores de drogas. *Excelsior*, recuperado de <http://www.excelsior.com.mx/global/2015/09/14/1045761>
- Pandillas juveniles involucradas en el tráfico de drogas (17 de marzo de 2005). *Red Voltaire*, recuperado de <http://www.voltairenet.org/article124261.html>
- Pierre-Charles, G. (1987). *El Caribe contemporáneo*. México: Siglo XXI editores.
- Rothkopf, D. J. (1998). *The Price of Peace: Emergency Economic Intervention and U.S. Foreign Policy*. Washington: Carnegie Endowment for International Peace.
- Scott, P.D. (2010). *American War Machine: Deep Politics, the CIA Global Drug Connection, and the Road to Afganistan*. United Kingdom: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Seguy, F. (2014). *A catástrofe de janeiro de 2010, a “Internacional Comunitária” e a recolonização do Haiti*. (Tesis de doctorado). Universidade Estadual de Campinas, recuperado de <http://repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/281247>
- Subcommittee on Criminal Justice, Drug Policy, and Human Resources of the Committee on Government Reform. (2001). *The Emerging Drug Threat from Haiti*, 106th Congress, 2nd session, 12 de abril de 2000. Washington: United States Government Printing Office.
- The White House. (1998). *A National Security Strategy for a New Century*. Recuperado de <http://nssarchive.us/NSSR/1998.pdf>
- The White House. (1999). *A National Security Strategy for a New Century*. Washington. Recuperado de <http://nssarchive.us/NSSR/2000.pdf>
- United States Department of State y Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs. (2017). *International Narcotics Control Strategy Report, Vol I Drug and Chemical Control*. Recuperado de <https://www.state.gov/documents/organization/268025.pdf>
- United States Department of State y U.S. Agency for International Development. (2010). *FY 2010. Haiti Supplemental Budget Justification*. Recuperado de <https://www.state.gov/f/releases/iab/fy2010haitisupp/index.htm>
- United States Senate, Subcommittee on Western Hemisphere, Peace Corps and Narcotics Affairs of the Committee on Foreign Relations. (2005). *A Fresh Start for Haiti? Charting the future of U.S.-Haitian Relations*. Hearing, 108th Congress, 2nd session, 10 de marzo de 2004. Washington: United States Government Printing Office.
- Withford, A. B. y Yates, J. (2009). *Presidential Rethoric and the Public Agenda: Constructing the War on Drugs*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.